**Examen Final**

Nombres y apellidos: Fabricio Alexander Flores Quispe

Código PUCP: 20202566

Profesora: Julissa Castro Silva

Curso: Economía Política

Ciclo: 2023-2

**La desigualdad como causa de la inestabilidad democrática: Análisis a partir de la experiencia del segundo gobierno de Alan García**

**Resumen**

En tiempos marcados por la profunda desconfianza de la ciudadanía peruana con la actual clase política y la brutal represión de protestas sociales por parte de agentes estatales se busca entender cuándo fue el momento en el que nuestra democracia comenzarse a debilitarse. En ese sentido, el presente ensayo pretende explicar por qué la estabilidad del sistema democrático peruano encontró un punto de erosión en el segundo gobierno de Alan García. Entre las posibles causas que pueden explicar tal fenómeno, se postula que el factor principal radica en la profundización de las desigualdades de tipo socioeconómico y étnico, debido a que las acciones institucionales de dicho gobierno marcaron su inoperancia para gestionar dicho problema. Se ocupan tres secciones en las que se explica el legado económico que había heredado García, la incapacidad del gobierno para generar bienestar socioeconómico y su marcado carácter represivo contra pueblos indígenas contrarios a sus proyectos políticos. Finalmente, el ensayo concluye con una breve explicación acerca de las limitaciones que presenta el argumento planteado, pero también destaca la importancia de considerar la desigualdad como un problema pendiente y que no se le ha brindado la debida atención ni se ha dimensionado la gravedad de sus consecuencias.

**Introducción**

El segundo gobierno de Alan García se ha caracterizado por mantener la orientación económica neoliberal heredada por los gobiernos anteriores, logrando resultados bastante favorables en términos macroeconómicos, tales como un aumento significativo de las exportaciones y el PBI. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico y los intentos de realizar obras dedicadas a temas sociales, el gobierno de García no consiguió disminuir la desigualdad imperante en acceso a servicios básicos o el reconocimiento de los pueblos indígenas, sino que, por el contrario, atravesó por un grave periodo de conflictividad social, principalmente, por oposición a proyectos mineros. Así, resulta vital conocer la influencia de la desigualdad en la estabilidad de nuestra democracia porque, de esta manera, se puede promover políticas que aborden la problemática de la desigualdad como un tema prioritario, de modo que se consigue un desarrollo sostenido y, a su vez, se fortalece nuestro sistema democrático.

En ese sentido, la pregunta de investigación planteada para la presente investigación es la siguiente: ¿De qué manera la desigualdad ha afectado la estabilidad del sistema democrático peruano durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011)? Para responder a dicha pregunta, se propone como hipótesis que el aumento de las desigualdades socioeconómicos y étnicas generaron un sentimiento de exclusión social, lo cual, a su vez, afectó la estabilidad del sistema democrático al crear tensiones y descontento entre la población.

**Revisión de literatura**

Los estudios sobre democracia y desigualdad han sido ampliamente abordados en la literatura académica. Varios de estos se enfocan en estudiar la relación de dichos conceptos con el crecimiento económico, instituciones, movimientos sociales, entre otros, con la finalidad de establecer cuáles son los factores que influyen significativamente en el fortalecimiento o debilitamiento del sistema democrático.

Las lecturas relevantes para la presente investigación se pueden dividir en dos partes. Una de estas se dedica al estudio de la desigualdad como fenómeno histórico-político. Por ejemplo, el libro de Piketty (2014), se dedica a analizar la evolución histórica de la desigualdad de ingresos y riqueza, así como proponer soluciones para la reducción de esta, como impuestos progresivos a la riqueza. A pesar de que dicho trabajo se ha enfocado en el estudio de varios países desde hace tres siglos, sus conclusiones pueden servir para entender cuáles son los factores que aumentan o disminuyen la desigualdad en nuestro país, así como también qué medidas se pueden adoptar para combatirla. Otro trabajo sugerente es el de Riggirozzi (2020), quien sostiene que los gobiernos progresistas de la región no han encontrado un equilibrio entre la reducción de desigualdades socioeconómicas y otros tipos de esta, como la étnica, de género, medio ambiente, entre otras, lo cual permite entender por qué se originan tantos conflictos sociales en el Perú en las últimas décadas. Un trabajo más reciente es de Sánchez Ancochea (2021), quien enfatiza en la influencia de la desigualdad en el debilitamiento de las instituciones, y que estas también tienen un impacto significativo en el aumento de la desigualdad, y propone soluciones para mejorar la redistribución de la riqueza y fortalecer a los actores políticos necesarios para el adecuado funcionamiento de la democracia.

La otra parte de trabajos académicos se dedican a analizar la relación entre la democracia y el desarrollo en diferentes partes del mundo. Un artículo sugerente al respecto es el de Przeworski et al.(2000), quien explica de qué manera los regímenes políticos han evolucionado a lo largo de los años a través de su relación con variables como el desarrollo económico, crecimiento poblacional, autoritarismos, entre otros, de modo que sus hallazgos puedan ser útiles para, a partir de las experiencias de otros países, entender los efectos de dichas relaciones en nuestro país. Otro trabajo destacable es el de Silva (2015), quien enfatiza en que los movimientos sociales pueden asumir un rol protagónico en la elaboración de políticas públicas, y menciona ejemplos de países en los que sus movimientos sociales elaboraron agendas políticas que, posteriormente, fueron implementadas por sus respectivos gobiernos, logrando, de esta manera, un mayor alcance del Estado para ofrecer una mayor calidad de vida a los ciudadanos.

**Los orígenes de la conflictividad social en el Perú post-Fujimori**

Uno de los factores que pueden explicar la inestabilidad del sistema democrático es el aumento de la desigualdad a nivel socioeconómico y étnico. Existe una relación causal entre ambos elementos, puesto que, desde el retorno a la democracia, a pesar del prominente crecimiento económico, nuestro sistema político se ha visto inmerso en un ininterrumpido periodo de inestabilidad marcada por numerosos conflictos sociales, cuyas demandas exigían, básicamente, mayor igualdad de derechos y oportunidades, así como también el respeto por la soberanía de los territorios y recursos naturales. Sin embargo, las respuestas por parte del Estado peruano siempre han apostado por la represión de las protestas y un nulo interés por brindar una mayor atención a las poblaciones vulnerables. El proceso de liberalización económica implementado desde los años 90 en el Perú no consiguió que esa riqueza se utilice en beneficio de la población, sino que fue concentrada por las élites políticas y económicas, lo cual impidió una adecuada inclusión de los sectores desfavorecidos en la sociedad. Según Piketty, “el proceso de acumulación y de distribución de la riqueza contiene en sí mismo poderosas fuerzas que empujan hacia la divergencia, o por lo menos hacia un nivel de desigualdad sumamente elevado” (2014, pp.39). Así, la conflictividad social fue escalando hasta llegar a su máximo expresión en el segundo gobierno de Alan García, siendo los dos principales factores de protesta la falta de acceso a servicios básicos y la oposición a políticas extractivistas contra poblaciones indígenas, los cuales se explicarán a continuación.

**Las obras sociales del segundo gobierno de García: la incapacidad para generar bienestar social a pesar del crecimiento económico**

Entre los principales aciertos económicos del gobierno mencionado, se puede destacar el hecho de mantener la estabilidad económica heredada del gobierno de Alejandro Toledo y, además, aprovechar la coyuntura económica a nivel mundial, la cual le era ampliamente favorable para profundizar el crecimiento económico del país tras el retorno a la democracia alcanzado hace algunos años atrás, como se explica en esta cita:

“La inflación se mantuvo controlada a lo largo del período 2006-2011, teniendo una variación porcentual anual promedio de 2,9%. La desnutrición crónica se redujo y pasó de 22,9% a 17,9% y, a partir de la promocionada apertura comercial y del alto precio de minerales, el país vivió una época de bonanza en las exportaciones” (IPE, 2019).

No obstante, estos indicadores macroeconómicos no fueron suficientes para solucionar un problema más grave: la desigualdad. Es decir, existe una relación entre el crecimiento y la desigualdad, en la cual el primero tiene consecuencias sobre el segundo. Según Novales, “el crecimiento económico tiene efectos prácticamente inevitables sobre la desigualdad, aunque el signo e intensidad de tales efectos dependen, por un lado, de la velocidad y de los aspectos estructurales del crecimiento y, muy en particular, del mecanismo distributivo dominante, que está determinado en buena medida por la calidad de las instituciones políticas y económicas” (2011, pp. 423). En definitiva, bajo este periodo presidencial, se ha visto una coyuntura política marcada por una profunda inestabilidad política, entendida como un periodo de constante conflictividad social, en la que el crecimiento económico se ve ralentizado por no atender de forma integral el problema de la desigualdad. Dicho gobierno se caracterizó por la planificación de programas sociales orientados a la mejora de servicios básicos como la educación o la infraestructura. Sin embargo, como la calidad de los mismos fue sumamente pobre, no se consiguió que la población se viera beneficiada por estos. Según Riggirozzi, “el crecimiento económico y los auges de los recursos naturales han producido modelos de inclusión social variados y altamente contextuales, pero con limitaciones reales que probablemente no satisfagan las demandas sociales de cambio” (2020, pp. 517-518). De esta manera, se exacerbó el descontento social de la población contra el gobierno, dada la incapacidad de este para aminorar las brechas sociales existentes, generando un debilitamiento de la cohesión de la sociedad peruana, lo cual fue sumamente perjudicial para la estabilidad del sistema democrático.

**“No son ciudadanos de primera clase”: criminalización de la protesta indígena como política institucional de gobierno**

El gobierno de García tuvo interés desde un comienzo en promover el desarrollo del país a través del extractivismo y los tratados de libre comercio. Sin embargo, tuvo una política bastante represiva y discriminadora contra los pueblos indígenas, generando cruentas masacres como el Baguazo, el Aymarazo, entre otras, porque se oponían al uso arbitrario de sus territorios para extraer recursos naturales. En ese sentido, su desidia para considerar la participación de los indígenas en las decisiones de gobierno determinó el talante discriminatorio de un gobierno que, claramente, excluía a determinados sectores poblacionales de la sociedad peruana. Según Sánchez Ancochea, “la desigualdad también ha contribuido a la segregación urbana y a la discriminación étnica y racial. A su vez, estos problemas sociales han obstaculizado el crecimiento de coaliciones entre los pobres y la clase media, que deben implementar políticas públicas más redistributivas” (2021, pp. 22). De esta manera, cuando las instituciones no son lo suficientemente sólidas como para contrarrestar los estragos de la desigualdad, el crecimiento económico puede verse ralentizado, incluso bajo gobiernos democráticos como el de García, contrariamente a lo que podrían sostener autores como Przeworski et al., quienes afirman que “la inestabilidad política retarda el crecimiento exclusivamente bajo dictaduras” (2000, pp. 212). Definitivamente, el hecho de promover una visión única de crecimiento económico e imponerla sobre la voluntad de los nativos, atentando contra su derecho a la autonomía de sus territorios, generó un sentimiento de desconfianza en las instituciones estatales por parte de los indígenas, cuyas organizaciones reclamaban participación en las políticas de gobierno. Según Silva, “los movimientos sociales son, entre otras cosas, expresiones de participación política. Debido a que buscan la inclusión, a veces buscan influir en las instituciones de intermediación de intereses” (2015, pp. 37). La respuesta desproporcionada del gobierno a las protestas sociales, sin duda alguna, socavó la legitimidad de las autoridades del Estado, lo cual contribuyó al progresivo debilitamiento de nuestra democracia.

**Conclusiones:**

El segundo gobierno de Alan García se caracterizó, principalmente, por su incapacidad para promover una adecuada inclusión social en la sociedad peruana, puesto que no se preocupó por aminorar las brechas de desigualdad en nuestro país, generando, de esa manera, las condiciones para el estallido de un considerable número de protestas en diversas partes del país. En ese sentido, resultaba importante entender cuáles eran los factores específicos que originaban dichas protestas, por lo que ha explicado un breve contexto acerca de los logros macroeconómicos conseguidos antes del periodo de García, así como los objetivos que este se había planteado al asumir por segunda vez la presidencia de la república, y se ha planteado como hipótesis de que las desigualdades socioeconómicas y étnicas tuvieron un impacto significativo en la estabilidad del sistema democrático peruano.

Ciertamente, la hipótesis mencionada podría encontrar algunas limitaciones debido a que se circunscribe exclusivamente en un país como el Perú, sin considerar que las causas de inestabilidad de las democracias pueden variar dependiendo de cada país y sus respectivas características, tales como su geografía, instituciones, contextos político-económicos, entre otros. Sin embargo, es valioso postular la desigualdad como un factor clave para alterar la estabilidad democrática de un país, puesto que, independientemente del contexto de cada nación, cuando en una sociedad se excluye a un determinado sector de la población a gozar de una adecuada calidad de vida y ser reconocidos como ciudadanos, mientras los sectores más poderosos concentran toda la riqueza, se violan los principios básicos de la democracia al impedir la igualdad de derechos y oportunidades, así como la debida participación y representación política formal, lo cual erosiona la estabilidad de cualquier régimen político. Por ello, es imposible que un gobierno pueda alcanzar un óptimo desarrollo económico y bienestar para su población cuando no ha atendido debidamente aquellas desigualdades que perpetúan la exclusión de los sectores desfavorecidos, impidiendo que se vuelva a confiar en las instituciones y autoridades carentes de toda legitimidad política.

**Bibliografía**

IPE. (2019, abril 21). Las dos caras económicas del expresidente. Instituto Peruano de Economía.<https://www.ipe.org.pe/portal/las-dos-caras-economicas-del-ex-presidente/>

Novales Cinca, A. (2011). Crecimiento económico, desigualdad y pobreza. In *anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas* (pp. 419-432). Ministerio de Justicia.

Piketty, Thomas. (2014). El Capital en el Siglo XXI. Fondo de Cultura Económica, México D.F. Introducción pp. 15-50.

Przeworski, Adam et al. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990, New York: Cambridge University Press

Sanchez Ancochea, Diego (2021) The Cost of Inequality in Latin America. Lessons and Warnings for the Rest of the World. I.B. Tauris: Londrés, Nueva York, Oxford y Sydney. Capítulo 1, 11-28.

Silva, Eduardo (2015). Social Movements, Protest, and Policy. European Review of Latin American and Caribbean Studies, (100), 27–39. DOI: <http://doi.org/10.18352/erlacs.10122>

Riggirozzi, Pía. (2020) Social Policy, Inequalities and the Battle of Rights in Latin America, Development and Change 51 (2), pp. 506-522.